

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN - SALA LABORAL

Medellín, veintiséis (26) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Apelación Auto

Exp. 05308-31-03-001-2023-00045-01

Cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede la Sala Quinta de Decisión Laboral, a resolver el recurso de apelación interpuesto por ALBERTO ALZATE ALZATE, frente al auto que denegó una medida cautelar dentro del proceso ejecutivo adelantado en contra de ANA ROMELIA SALDARRIAGA CASTRILLÓN, FRANCISCO LUIS, WILSON ANDRÉS, JHON JAIRO, ALEXANDER, FERNANDO LEÓN y DIANA MARÍA SUÁREZ SALDARRIAGA.

ANTECEDENTES:

El promotor de la acción ejecutiva impulsó este trámite para lograr la satisfacción plena del acuerdo efectuado dentro del proceso ordinario con radicado 2021-00023 en la diligencia del artículo 77 del CPTSS en su etapa de conciliación, donde se pactó la cancelación de una suma de dinero y, además proceder con el pago de un cálculo actuarial por aportes dejados de realizar entre el 08 de noviembre de 2010 y el 25 de octubre de 2016. En esa oportunidad, se solicitó una medida cautelar, encaminada al embargo y secuestro de un bien inmueble de propiedad de uno de los ejecutados.

El 31 de mayo de 2023, el juzgado de conocimiento que lo es el Civil con Conocimiento en Procesos Laborales del Circuito Judicial de Girardota libró mandamiento de pago en favor del ejecutante por concepto del cálculo actuarial, teniendo como salario el mínimo legal mensual vigente, además de las costas del proceso ejecutivo, negando la medida cautelar pedida, argumentando que como se trata de una obligación de hacer tal medida coercitiva resulta improcedente (Archivo 05).

El ejecutante se apartó de la negativa dispuesta e interpuso recurso de reposición y en subsidio suyo el de apelación, señalando que a la obligación sobre la cual se libró mandamiento de pago le asiste el deber de ser exigida y cumplida por quien figura como titular de dominio del bien inmueble que es objeto de la medida, misma que entonces debe ser garantizada (Archivo 06).

La directora del proceso negó por extemporáneo el recurso de reposición y concedió la alzada, razón por la que atañe a esta Sala el conocimiento del trámite.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES:

Sea lo primero destacar que la Sala es competente para resolver el asunto, dado que el auto atacado se encuentra previsto en el numeral 7° del artículo 65 del CPTSS, según el cual son recurribles a través de la apelación las decisiones de primer nivel que decidan sobre medidas cautelares.

A partir de los antecedentes, el problema jurídico consiste en determinar si la resolución de las medidas cautelares pedidas por el promotor de la acción

ejecutiva, resulta pertinente de cara a las exigencias procesales requeridas y la obligación por la que se procedió a librar mandamiento de pago.

Pues bien, para dar resolución al disenso presentado por la activa, se tiene que es cierto que atendiendo lo perseguido en este trámite, se está ante una obligación de hacer por tener por objeto una prestación consistente en desarrollar una actividad distinta de la de dar, pues si bien debe extraerse del patrimonio del deudor una suma de dinero para efectos de dar cumplimiento a la obligación, no va dirigido en este caso directamente al acreedor, sino que implica una gestión ante el Fondo o Administradora de Pensiones, quien finalmente materializa ese pago en unos aportes y la publicidad de los mismos en la respectiva historia laboral.

Ahora, el fundamento sustantivo de las medidas cautelares que puede solicitar un acreedor para hacer efectiva la obligación, es el derecho de persecución que se materializa sobre el patrimonio del deudor, el cual, como se sabe, es prenda común y general de los acreedores. Estos medios coercitivos tienen amplio sustento constitucional, puesto que desarrollan el principio de eficacia de la administración de justicia, y son un elemento integrante del derecho de todas las personas a acceder a la administración de justicia y contribuyen a la igualdad procesal.

Es a partir de lo anterior, y atendiendo la naturaleza de la obligación impuesta, que no se da razón a la Juez de Primer Grado, porque hacerlo da cabida para que las obligaciones distintas a las de dar sumas de dinero, pero en las que interviene un capital para su perfeccionamiento, se hagan nugatorias, pues ante la evidente inobservancia y resistencia de los deudores para dar acatamiento a un acuerdo con mérito ejecutivo sin que exista con fuente legal un modo de persecución, se propugna por una ineficacia absoluta de la intervención judicial en este tipo de trámites, que da paso a una administración de justicia sin idoneidad, lo que no es viable de ser permitido, pues estas medidas se han constituido precisamente en parte esencial del sistema legal Colombiano, porque sin ellas no es posible hablar de efectividad judicial, justicia y equidad. De modo que, de no

permitirse el embargo y secuestro de bienes sobre este tipo de obligaciones, se desmerita el fin proteccionista de los derechos que en este caso asiste a los trabajadores y facilita el desarraigo de los obligados a las órdenes judiciales que no implican propiamente reconocimientos pecuniarios, lo que a todas luces contraría el fin último del legislador.

Es así como si bien en estricto sentido se trata de un dinero que no va a ser entregado al actor, no impide ejecutar la condena, estando el señor Alzate legitimado para promover tal ejecución, pues la obligación objeto de condena, estará destinada a garantizar el pago del cálculo actuarial al respectivo fondo de pensiones, el que para julio de 2022 correspondía a la suma de \$55.447.451 (Ver STL6934-2023).


Bajo ese panorama, considera esta Sala de Decisión que la medida decretada se torna en razonable para la protección de la obligación perseguida, por lo que la decisión revisada habrá de revocarse, para en lugar imponer el decreto de la medida cautelar sobre el bien inmueble con Número de Matrícula 012-43571 cuyo titular es el señor FERNANDO LEON SUÁREZ SALDARRIAGA, ejecutado dentro del presente trámite, debiendo el juzgado de origen dar paso a las actuaciones pertinentes para su materialización conforme a lo que pregonan los artículos 593 y siguientes del CGP.

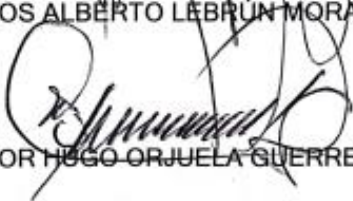
En esta instancia no se causaron costas.


DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, **REVOCA** el auto proferido el 31 de mayo de 2023 en cuanto dispuso la improcedencia de la medida cautelar, para en su lugar, **DECRETAR** el embargo y secuestro del bien inmueble con Número de Matrícula 012-43571 propiedad de Fernando León Suárez Saldarriaga, de donde el Juzgado habrá de desplegar las gestiones pertinentes.

Los Magistrados,


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

Se certifica: Que la sentencia anterior fue notificada por
ESTADOS N° 163 fijados el 27 de septiembre de 2023
En la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

El secretario.